

Universidad pública a debate: problemas del desarrollo, gestión estatal y funcionalidad académica

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

La crítica de la universidad a cargo de los propios universitarios es una acción indispensable que contribuye a mejorar su función social y actualizar sus modelos académicos y el trabajo docente e investigativo. A diferencia de otras estructuras institucionales, como los gobiernos, partidos y empresas, para los universitarios el ejercicio cotidiano de la crítica y la autocrítica es un momento afirmativo de la vocación dialéctica, reflexiva y propositiva. La cuestión de la reforma de la universidad pública supone la necesidad de superar el estancamiento en que el proyecto de neoliberalización ha postrado al sistema educativo a fin de construir otro no sólo más incluyente sino además detonador del conocimiento científico, el desarrollo y la cultura universal.

Crítica y autocrítica

El debate sobre el papel y el futuro de las universidades se presenta y actualiza día con día, en las escuelas, academias, consejos y aulas. En las comunidades académicas, el debate y el disenso son expresiones consustanciales a la genuina vida universitaria. La discusión en torno a su transformación es un asunto de incumbencia global, al calor de los desafíos actuales de un mundo en constante cambio, pero también un asunto local que atañe a la realidad inmediata y a las peculiaridades sociales, ambientales y políticas de cada contexto.

Mientras que en Estados Unidos, cuna de la universidad empresarial elitista, ahora se plantea un debate acerca de una «nueva universidad norteamericana», presumiblemente más incluyente e innovadora en atención a la solución de problemas sociales,¹ donde las universidades en vez de

congraciarse por la tasa de rechazo, deberían de ocuparse en aumentar el número de estudiantes admitidos. En contraste, en países como México estamos sumidos en el atraso, sujetos a dogmas neoliberales como el de la austeridad, aderezados con arrebatos populistas, que regatean recursos para la educación en general y la educación superior en particular, y se renuncia a la función estatal de obligatoriedad y gratuidad de la educación en todos los niveles.

El mundo actual: crisis, pandemia, guerra y revolución

El signo de la crisis se cierne a escala planetaria, de manera más recurrente y por distintos flancos. Ejemplos recientes son la gran recesión de 2008-2009 y la crisis de la pandemia de covid-19 de 2020-2021. Las crisis adquieren varios significados porque suponen un quiebre en el proceso de valorización de capital, por sobreproducción y caída de tasa de ganancia, que redundan en la depuración de capitales (destrucción de empresas

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México

¹ Michael Crow y William B. Dabars, *The fifth wave. The evolution of American higher education*, Johns Hopkins University Press, 2020.

y empleos) y afianza la concentración de capital en vista del relanzamiento de nuevos ciclos de acumulación, como el alentado por la cuarta revolución industrial. Estos movimientos convulsos van acarreado degradación social y ambiental, aun cuando entrañan promesas de una nueva fase de progreso.

La propagación del virus SARS-CoV-2 y de la consecuente pandemia de covid-19 se explica como un fenómeno sanitario derivado de la emergencia de una enfermedad zoonótica (salto entre especies del virus, de organismos animales a humanos), que profundiza el quiebre del metabolismo sociedad-naturaleza, que en conjunto representa una crisis del entramado civilizatorio: no sólo del proceso de valorización de capital, de las relaciones sociales, la materialidad y las relaciones de poder, sino también de las fuentes de riqueza, trabajo y naturaleza.

Las crisis no logran depurar los múltiples conflictos coexistentes, más bien los agudizan. En el plano geopolítico se profundiza la confrontación entre las grandes potencias y sus bloques de poder en los planos comercial, militar y cibernético. La guerra de Rusia en Ucrania por la conquista y control de territorios, supone como telón de fondo una disputa geopolítica de alcance regional y mundial. En el fondo, subyace la disputa por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, cada uno con sus aliados reales y potenciales.

La denominada cuarta revolución industrial entraña procesos de automatización impulsados por nuevas tecnologías convergentes en procesos productivos, distributivos y consuntivos, como la inteligencia artificial, la robótica, la telefonía móvil 5G y el internet de las cosas. Ello abre la posibilidad de que máquinas inteligentes se comuniquen entre sí en un sistema industrial maquinístico operado bajo la configuración de fábricas inteligentes con inteligencia artificial y robótica. El entretejido algorítmico, los macrodatos, las computadoras y el internet operan como el sistema cerebral de robots y dispositivos digitales que forman el sistema nervioso y muscular de una fábrica de inteligencia en gestación.

La nueva oleada tecnocientífica presagia la formación de una nueva fuerza de trabajo dotada de capacidades sociotécnicas más complejas que demandan, a su vez, nuevos perfiles educativos y profesionales provistos por las universidades al calor de un mercado laboral en transformación. Por lo pronto, la crisis pandémica propició la introducción de la avanzada de la cuarta revolución industrial en la educación mediante la implementación de la interrupción de los mecanismos analógicos en los procesos educativos y la inducción de procesos virtuales y digitales tomando como detonador la educación a distancia a través de las plataformas digitales. Procesos que develaron contradicciones, como el problema de la exclusión digital y el rezago educativo de amplios sectores sociales.

Raíces estructurales

México tiene una de las peores configuraciones capitalistas. Ciertamente es un país independiente en términos políticos, pero se ubica en la periferia del capitalismo mundial y está supeditado al bloque de América del Norte. Es un espacio de valorización subsumido en el subdesarrollado y la dependencia que funge como plataforma de exportación para la economía estadounidense mediante el uso intensivo de sus reservas de fuerza de trabajo barata y recursos naturales, más allá de la configuración de las mercancías transables como automóviles ensamblados, piezas automotrices, productos electrónicos, petróleo crudo, minerales, drogas y fuerza de trabajo barata.

La problemática estructural radica en el patrón de generación de excedente bajo capital multinacional y nacional sujeto a un patrón de acumulación que en lo sustancial opera como un eslabón débil de cadenas globales de producción, recurrir a la superexplotación de trabajadores y depredar el ambiental; además de que una porción importante del excedente se transfiere al exterior por fuga de capitales, deuda, remesas de ganancia, comercio intrafirma, pago de regalías; de ahí que no se reinvierta productivamente el excedente. Esta dinámica de desacumulación deriva en generación de abundante sobrepoblación en términos relativos y absolutos, informalidad, pobreza y violencia.

En la actualidad, el país atraviesa por un periodo político de transformación pasiva o transformismo, donde se antepone la disputa por el poder político sobre los cambios estructurales, porque un grupo político busca construir una hegemonía política transexenal, pero sin hacer cambios sociales. La retórica política ha impuesto una disputa por los datos y las interpretaciones para encubrir la realidad y proteger la imagen de los gobernantes.

La transformación social sustantiva sigue siendo una asignatura pendiente que no se soluciona con alternancias electorales y ajustes administrativos y programáticos, sino con cambios estructurales profundos.

Postal de un México en llamas: sintomatología de la decadencia

La mayor parte de los mexicanos está compuesta por una clase trabajadora sumida en la precarización, el desempleo y la informalidad. En México hay casi 75 millones de personas en edad y posibilidad de trabajar, pero sólo 9 millones tienen un empleo con un salario suficiente para mantener una familia y con seguridad social; más de 35.5 millones de trabajadores carecen de seguro social y salario suficiente que les permitan comprar una canasta familiar, y 24.6 millones están excluidas del mercado laboral.²

La pobreza es el signo social que cubre a la mayoría de la población. En situación de pobreza están 55.7 millones de mexicanos (44% de la población) y 23% de la población registra pobreza alimentaria, debido a las condiciones de pobreza y la malnutrición y desnutrición infantil; en tanto que 10% de la población no tiene acceso a agua potable dado que prevalecen rezagos en la infraestructura por una red de agua potable vieja, con pérdidas, distribución desigual e insalubridad del agua; además de que los bajos salarios y la espiral inflacionaria generan carestía de muchos productos básicos.³

El deterioro del sistema de salud público es síntoma de indolencia estatal y redundante en una espiral de degradación humana. El cuadro patológico muestra que 36 millones de mexicanos (28%) no tiene acceso a servicios de salud,⁴ en tanto que persiste el desabasto de medicamentos, insumos, equipo y personal médico en los centros de salud y hospitales públicos. El desmantelamiento del Seguro Popular y su reemplazo por el fracasado Insabi y el eventual traspaso de funciones al IMSS-Bienestar no hacen más que corroborar la incapacidad gubernamental en materia sanitaria al deteriorar la provisión de medios de consumo colectivo, en su capítulo de salubridad. El punto de quiebre fue la mala gestión de la pandemia de covid-19 que produjo 201 mil 163 defunciones en 2020 y esta enfermedad provocó un exceso de alrededor de 150 mil muertes, por lo cual el total de muertes se incrementó en 45% en un año.⁵ Muchas muertes pudieron ser evitadas y el sector salud pudo haber sido rehabilitado, pero en lugar de ello se sumió en el pantano de la austeridad (recortes presupuestales, subejercicios, ahorros) que mata a los enfermos, a los trabajadores de la salud y al sistema sanitario en su conjunto.

² Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), Semáforo de Trabajo Digno, 2021, en <https://drive.google.com/file/d/133KcbhaqPFWwUfKj2FuVNMn3rQnuI-16/view>

³ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), «Coneval presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020», Coneval, 2021, en https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf

⁴ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), «Evaluación estratégica de salud. Primer informe», Coneval, 2022, en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Evaluacion_Estrategica_Salud_Primer_Informe.pdf

⁵ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Características de las defunciones registradas en México durante 2020», 29 de junio de 2021, en <https://t.co/dK3j9mI704?amp=1>

Las altas tasas de criminalidad muestran una estela necrófila. Los homicidios dolosos están al alza con más de 110 mil entre 2018 y 2022. Los feminicidios también ascienden con más de 3 mil 100 casos reportados. Además, se cuentan 95 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas y 52 mil fallecidas sin identificar desde 1964 hasta 2021.⁶ Por si fuera poco, se estima que no se denuncia 93.3% de los delitos que se cometen,⁷ por temor, desconfianza en las autoridades u otras razones; esa es la dimensión de la cifra negra. La desbordante mortandad criminal ha propiciado una inusitada crisis forense: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Irrumpe el fenómeno del desplazamiento forzado para localidades enteras y grupos familiares victimizados o amenazados. Asimismo, la criminalidad acomete asesinatos de personajes sociales del mundo de la política y el periodismo, aparte de activistas defensores de derechos humanos, ambientalistas y líderes sociales, pero también de estudiantes.

La corrupción y la injusticia prevalecen como fenómenos arraigados en la esfera del poder. En tanto que la impunidad criminal carcome el sistema de justicia toda vez que sólo 1% de los casos denunciados son resueltos en las instancias oficiales.⁸ Irremisiblemente, el sistema de procuración de justicia es fallido, en tanto aguja su perfil punitivo, como se deriva de la ampliación del catálogo de delitos y la ejecución de la prisión preventiva oficiosa, lo cual presiona a un sistema carcelario sobrepoblado y disfuncional para cumplir el presunto cometido de rehabilitación social. En todo caso, prevalece el clima de inseguridad y delincuencia: los grupos del narco y crimen organizado

⁶ Sandra Martínez, «95 mil personas desaparecidas y 52 mil personas fallecidas sin identificar», Organización de las Naciones Unidas, 29 de noviembre de 2021, en <https://mexico.un.org/es/163814-95000-personas-desaparecidas-y-52000-personas-fallecidas-sin-identificar>

⁷ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), «Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública», INEGI, 22 de septiembre de 2021, en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf>

⁸ Alfredo Maza, «En México 99% de los delitos quedan en la impunidad», *El Sol de México*, 7 de diciembre de 2021, en <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-mexico-99-de-los-delitos-quedan-en-la-impunidad-7577147.html>

Pese a los indicadores contradictorios de una ampliación de cobertura universitaria con exclusión social, el panorama general en México es notoriamente regresivo, toda vez que la cobertura universitaria en México sigue siendo notoriamente baja.



campean en amplios territorios del país, y una multiplicidad de ciudades y localidades rurales se tornan espacios peligrosos para sus habitantes y personas en tránsito.

La migración forzada reanuda su itinerario, que se suma a la ancestral migración acumulada, y profundiza el despoblamiento y la dependencia de las remesas. El fenómeno es más complejo con la crisis migratoria centroamericana y caribeña, aunada a la sudamericana y extracontinental, que ha sido reprimida o contenida con personal militar, en atención a requerimientos del gobierno estadounidense, que considera al territorio mexicano como un dique de contención y un espacio de su propia seguridad nacional. En términos generales, se observa que la economía se encuentra en fase de decrecimiento, con peligro de estancamiento: estancamiento, inflación, desempleo. En contraste crece el sector informal y la economía criminal.

Del fin de la universidad a su expansión con desigualdad

Los gurús de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han fraguado diversas tesis de cambio social, como la del fin del trabajo y la tesis alícuota del fin de la universidad, al menos tal como la conocemos. No obstante, la evidencia empírica recabada en las

dos últimas décadas arroja un claro desmentido, porque pese al mayor influjo de las nuevas tecnologías, se observa que la matrícula de las universidades se ha incrementado: a escala mundial, la tasa bruta de matriculación aumentó de 19 a 38% entre 2000 y 2018, y lo que es más, con mayor participación de mujeres que de hombres (41 y 36%, respectivamente). En América Latina y el Caribe, región donde se verificó el segundo mejor avance, el aumento de la matriculación fue de 23 a 52%.⁹

Cuando menos en términos cuantitativos, la importancia de la universidad se ha acrecentado, no desaparecido; sin embargo, las cosas cambian cuando se observa que el acceso a la educación superior se concentró en las clases sociales de mayores ingresos: entre 2000 y 2018, el crecimiento de la tasa bruta de matriculación entre los más pudientes fue de 22%, con una tasa de 77% en 2018; mientras que entre los más pobres sólo fue de 5%, con 10% en 2018; a su vez, el fenómeno de la exclusión universitaria fue más pronunciado durante la pandemia de covid-19 y la consecuente reconversión educativa hacia el uso generalizado de plataformas digitales.¹⁰

⁹ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), *Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales*, UNESCO, París, 2020.

¹⁰ *Idem*.

Pese a los indicadores contradictorios de una ampliación de cobertura universitaria con exclusión social, el panorama general en México es notoriamente regresivo, toda vez que la cobertura universitaria en México sigue siendo notoriamente baja: 40%, por lo que la deuda educativa del Estado mexicano tiene, entre sus saldos negativos, la cobertura universitaria y la inclusión de clases sociales empobrecidas.

Neoliberalización educativa

Desde finales de la década de los 1970, el capitalismo mundial se ha reconfigurado derivado de la crisis mundial y su efecto en la órbita nacional que llevó al traste el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el estallido de la crisis internacional del petróleo y la crisis de la deuda. Motivo por el cual el capitalismo mundial se reestructura y adopta una estrategia de internacionalización con un tejido de cadenas globales de producción y el predominio del capital multinacional. Con la crisis de la deuda y el quiebre fiscal del Estado en los 1980, se implementa el programa de ajuste estructural de corte neoliberal (apertura comercial, flexibilización, desregulación), que redundará en la disminución del gasto fiscal y recorte en el gasto social. Como efecto compensatorio, los programas de «combate a la pobreza» focalizan recursos en poblaciones con pobreza extrema que realizan transferencias dinerarias o en especie en lugar de universalizar los bienes y servicios públicos, en particular la salud y la educación. En conjunto, se opera una política de ajuste social que disminuye la participación del sector de los trabajadores en el ingreso nacional a fin de favorecer la apropiación de ganancias, intereses y rentas para el capital.

En el renglón educativo se implementan programas de modernización educativa acordes a la prédica neoliberal en todos los niveles. En el ámbito de la educación superior, se pone en marcha una reforma universitaria *de facto*, un fenómeno que puede designarse como neoliberalización de la universidad. Los rasgos básicos de esta metamorfosis son los siguientes:

Austeridad presupuestal. Política de desfinanciamiento en la educación bajo la adopción de la norma de austeridad neoliberal («hacer más con menos»), que incrementa el déficit presupuestal y agudiza las desigualdades entre universidades grandes, medianas y pequeñas.

Evaluación condicionada y punitiva. Evaluación del desempeño de instituciones universitarias, programas educativos, investigadores, docentes y estudiantes bajo la norma de la competencia, el productivismo, lo cual inculca el virus de la competencia y el castigo a sectores con evaluaciones negativas, sin generar procesos de autoaprendizaje en las comunidades universitarias.

Precarización laboral. Política de tope salarial y división de trabajadores por condiciones laborales estables y precarias con tendencia

a, por una parte, el elitismo y, por la otra, la proletarización; la política salarial por competencia pondera la productividad académica individual sin recursos complementarios para el presupuesto universitario y la investigación.

Mercantilización. Impulso a la generación de ingresos propios en las universidades mediante una variedad de políticas y proyectos como la venta de servicios educativos, el cobro a estudiantes de colegiaturas, trámites, exámenes, cursos, seminarios; proyectos de investigación financiados por agencias públicas y privadas, trabajo de consultoría, etcétera.

Privatización de la educación superior. Ampliación del mercado educativo con incremento desbordante de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas y la consecuente pérdida de relevancia de las públicas; esto supone un marco de competencia, sin que necesariamente se privilegie la mejora en la docencia, la investigación y el vínculo social; a la vez que en las públicas se adoptan criterios gerenciales y educativos propios de sector privado.

Heteronomía. Vulneración de la autonomía universitaria, en tanto piedra angular del ser de las instituciones públicas, mediante la introducción de determinaciones exógenas de las autoridades educativas, hacendarias y parlamentarias, aunado a la impronta del capital, los gobernantes y los partidos políticos.

Burocratismo. Sobredeterminación del poder burocrático interno y externo sobre instancias colegiadas universitarias con una cadena de mando que articula la prédica de la neoliberalización universitaria (organismos internacionales, autoridades nacionales, instancias evaluadoras, rectores y directores) y la adopción del modelo gerencial como forma de conducción institucional.

Exclusión social en las universidades. Restricciones al acceso en la educación universitaria mediante la elitización universitaria que pondera una evaluación selectiva de estudiantes en los niveles secundario y terciario con la consecuente exclusión de estudiantes con menor preparación, habitualmente los de menores ingresos que han recibido formación deficiente en instancias previas.

Currículo basado en competencias. Educación por competencias y empleabilidad para un saber hacer laboral con homogeneización del conocimiento, en atención a criterios de empleabilidad, emprendedurismo y perfiles laborales específicos.

Reconfiguración del sujeto pedagógico. El docente deja de ser un trabajador intelectual para ser un facilitador del proceso educativo y pedagogía constructivista para que cada estudiante tenga una meta educativa específica.

Panorama educativo nacional

Un país como México, considerado la decimoquinta economía del mundo por su volumen de producción, detenta en contraposición uno de los niveles educativos más bajos. Considerando a la población de 15 años y más, el promedio de escolaridad en el país en 2020 era de apenas 9.7 años, un nivel que representa únicamente el de secundaria terminada y un año de preparatoria inconcluso. Dicho nivel resulta extremadamente bajo, muy alejado de cualquier requerimiento para impulsar el desarrollo nacional, que precisa de una gran masa de trabajo complejo, es decir, de trabajadores calificados que cuenten con años de formación acumulado en materia educativa, científica, tecnológica y cultural, lo cual se ubica en niveles de posgrado, particularmente de doctorado, si se busca impulsar las fuerzas productivas y un modelo de desarrollo con esquemas de acumulación intensivos.

El sistema educativo mexicano se caracteriza por dibujar trayectorias educativas regresivas, acordes al efecto «embudo»: por cada 100 alumnos que ingresan a la primaria tan sólo 21 terminan la licenciatura, cuatro estudian una maestría y uno el doctorado.¹¹

El problema de la deserción se inscribe en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la educación a la población que lo demande, pero también es muestra de las desigualdades sociales y educativas prevalecientes, aunado a la desvalorización de los perfiles educativos confrontados

¹¹ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), «Panorama de la educación 2017», 2017, en <https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf>

con los mercados laborales. Al respecto, es sintomático el dato de que 49.7% de los estudiantes en México en 2018 se vieron forzados a abandonar la escuela debido a la falta de recursos para pagar inscripciones, útiles y transporte.¹²

Con la declaración de la pandemia de covid-19 en 2020, sin que se tenga claro cuando terminará, además del cierre de actividades productivas, se tradujo en un desplome educativo porque se cerraron las escuelas para trasladar la educación a distancia que enclaustró a los alumnos en sus casas y exhibió enormes brechas en el uso de dispositivos y plataformas digitales, lo cual redundó en deserción, desánimo entre estudiantes y docentes y un deterioro generalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por añadidura, el gasto público en educación ha descendido y se ha centrado en becas para alumnos, en desdoro de la formación docente, la investigación científica y el impulso a la tecnología educativa. Los organismos internacionales anticipan un retroceso educativo generalizado.

Educación superior

El sistema de educación superior en México ha mostrado cierto grado de crecimiento, pero todavía es insuficiente. En la década de 1990, en el ámbito nacional, se contaba con 776 instituciones que atendían a 1.25 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado, mientras que en el ciclo 2019-2020 esta cifra aumentó a poco más de 4 millones de estudiantes presentes en 5 mil 716 escuelas, en su mayoría públicas y en modalidad escolarizada.¹³

No obstante, persiste un acusado problema de exclusión en las universidades si se considera que sólo 42% de jóvenes de 18 a 22 años asiste a la universidad u otra IES en México;¹⁴ aun cuando en 2015 ese dato era menor al situarse en 30%. Con todo, la formación universitaria de los mexicanos se presenta en niveles muy escuálidos en el espectro internacional. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de la población de entre 25 y 64 años que ha cursado la educación superior es de 37%, pero en México ese indicador está por debajo con apenas 17%.

El elitismo es más exacerbado todavía en Estados Unidos, país con el cual México tiene una remarcada dependencia económica. En el vecino del norte, reputado como la meca de las universidades globales, está

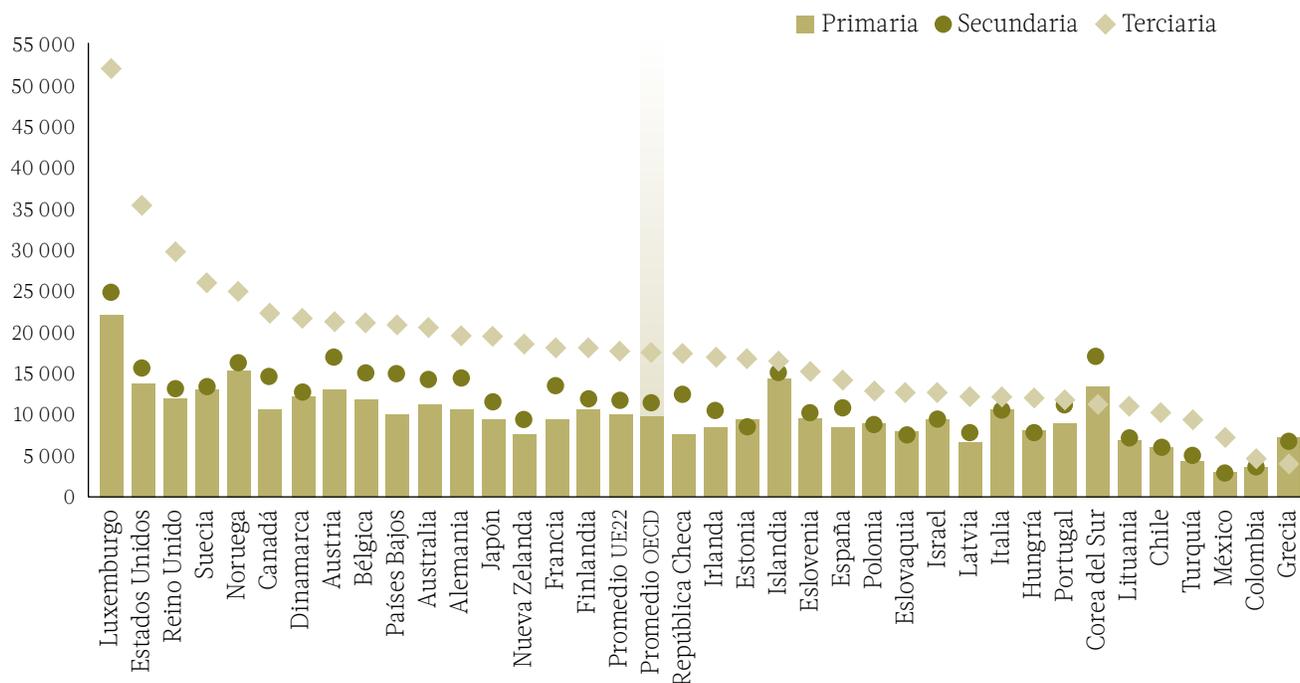
¹² Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), «Encuesta Nacional de Deserción Escolar en la Educación Media Superior (ENDEMS)», Secretaría de Educación Pública, 2012, en https://www.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1/images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf

¹³ Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México, «Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México», año 3, núm. 1, 2022.

¹⁴ Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), «Criterios generales para la asignación y distribución de los recursos autorizados al programa U079», Secretaría de Educación Pública (SEP), 2022, en <https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sites/default/files/2022-05/criteriosU079.pdf>

Gráfica 1. Gasto total por estudiante equivalente a tiempo completo por nivel educativo (2019).

En dólares equivalentes convertidos usando PPA para el PIB, gastos directos dentro de las instituciones educativas



alojado el sistema universitario más elitista, compuesto por las Ivy League (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania y Yale), las cuales admiten a cinco de cada 100 aspirantes en promedio. La exclusión es tomada como sinónimo de calidad o éxito. Ese criterio también ha sido adoptado en posgrados mexicanos, como indicador de calidad educativa. En Estados Unidos también se debaten otros modelos universitarios alternativos, como el modelo de «universidad nacional de servicio» que impulsan la Arizona State University y la Penn State y Purdue.

Discursivamente, la política de educación superior mexicana, en la última década, se orienta a, primero, incrementar la cobertura (matrícula), y después a mejorar la calidad de los programas educativos; no se considera mayormente la generación de conocimiento para el sector productivo y social. Se espera que en los próximos 15 años México alcance una cobertura de 65%, comparada con la actual que es de 38%, sin dejar de lado la calidad educativa de los programas ofertados.¹⁵

Mientras que la consigna oficial ha sido ampliar la cobertura educativa, ese cometido no se acompaña de incrementos sustanciales al presupuesto, sino que, al contrario, bajo la tónica de la austeridad, se recortan.

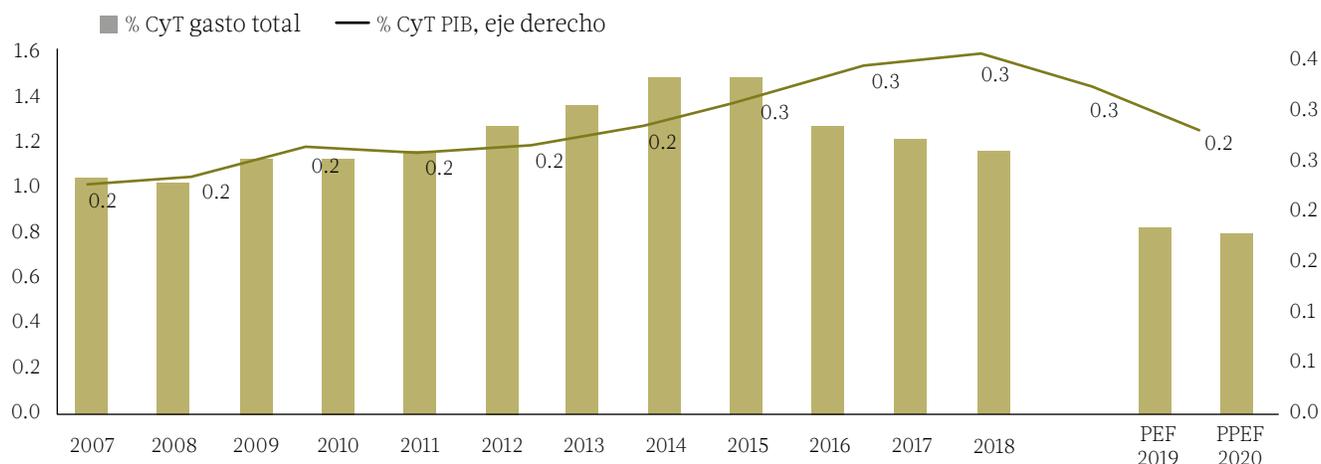
Se registran algunos avances en la ampliación de la matrícula: en el ciclo 2015-2016 era de 3.64 millones y en el ciclo 2020-2021 ascendió a 4.9 millones. Cabe advertir que la matrícula tiene un patrón de alta concentración en las principales metrópolis del país (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera). Las desigualdades sociales, geográficas y educativas en el país siguen siendo enormes, en tanto que la calidad educativa se distingue por ser deficiente, en un entorno donde la disponibilidad de espacios para estudiantes universitarios que lo demandan crece lentamente.

Es indiscutible que la masificación y la extensión de la universidad pública mexicana no se contraponen con la función que esta forma institucional puede asumir como impulsora del desarrollo a escala nacional o regional mediante el despliegue y

¹⁵ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), «Plan de desarrollo institucional, Vi-

sión 2030», ANUIES, 2016, en http://www.anui.es.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf

Gráfica 2. Evolución del gasto en ciencia y tecnología del gobierno federal (como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto total)



Fuente: Ignacio Ruelas, «Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué?», Nexos, 2019.

potencialización de sus funciones de investigación, docencia y vinculación social. Al contrario, es parte de su fundamento. En México, la masificación y la extensión sólo la tienen bien afianzadas las grandes universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el epicentro del sistema universitario público mexicano alojada en la Ciudad de México, que fiel al centralismo mexicano ha sido el asiento de los poderes del Estado y de la educación nacional, con 360 mil estudiantes y presencia en todo el país, o la Universidad de Guadalajara (UdeG), otra de las grandes universidades, pero está ubicada en el occidente del país, con 310 mil estudiantes con una organización en red universitaria en las regiones del estado de Jalisco.

En ese contexto, el proyecto educativo en el nivel universitario se debate entre dos polos: la educación tecnocrática y la educación populista. De manera pragmática, una línea que se ha promovido es el eje de la educación, ciencia, tecnología e innovación para fomentar el acercamiento de la empresa a la universidad, y no al revés; no obstante, con el gobierno federal actual este lineamiento, en uno u otro sentido se modifica, como se deriva, por ejemplo, de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y el proyecto de reformar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) bajo las líneas programáticas del gobierno, donde se acomete a una supuesta «ciencia neoliberal» para

presuntamente instaurar una «ciencia de Estado». En uno u otro caso, los universitarios no han sido consultados, aunque tampoco se han realizado debates académicos y políticos en las universidades para formular propuestas desde sus ámbitos de actividad científica, educativa, social y cultural.

Está ausente un genuino proyecto universitario progresista, de inclusión social, desarrollo científico y cultural, que además articule a todos los niveles educativos con respaldo presupuestal y proyecto de la formación educativa hacia un genuino desarrollo humano y la formación de profesionistas, científicos altamente calificados.

No sólo se requiere que el Estado mexicano rescate a las universidades públicas estatales, a fin de generar condiciones en un cierto plano de igualdad institucional y presupuestal que proyecten su crecimiento, ampliar la cobertura educativa en sus áreas de influencia, sino para reconfigurar al sistema universitario mexicano como un entramado institucional de investigación, docencia y vinculación acorde a los desafíos del desarrollo nacional y local.

Egresados de IES

El obstáculo mayor para el progreso profesional, inclusive para quienes cuentan con buena educación y capacitación, siguen siendo las

estructuras sociales, donde la pertenencia a una determinada clase social imprime un designio social difícil de superar para la mayoría de quienes se ubican en las clases desposeídas. Los canales de movilidad social que suponen la formación universitaria, cuentan con pocos resortes para sus egresados en la escala social.

Los egresados de la educación superior cada vez más se perfilan como universitarios disfuncionales en el mundo del trabajo en la medida en que se reconvierten en cuentapropistas o «emprendedores», ante la segmentación, contracción y precarización del mercado laboral: la proporción de egresados que eran trabajadores por cuenta propia o que dirigían un negocio que empleaba a terceros, aumentó de 12.7 a 13.8% entre 2010 y 2017, las tasas más altas de esos peculiares «emprendedores» está en los campos de las artes, humanidades, agricultura e ingeniería.¹⁶

De acuerdo con el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el organismo privado Ceneval, que utiliza instrumentos de evaluación estandarizada de conocimientos y habilidades de los recién egresados, de las 1.38 millones de evaluaciones realizadas a estudiantes entre 2005 y 2016 al término de la licenciatura, más de la mitad no aprobaron y sólo 8% logró un resultado sobresaliente.¹⁷ Esas evaluaciones no toman en cuenta el contexto social y económico ni las condiciones institucionales y presupuestales en las cuales se forman los estudiantes de licenciatura.

En el nivel de posgrado se observa una tendencia al crecimiento que favorece al sector privado: los posgrados de las IES públicas y privadas tienen un aumento promedio anual de 12 mil 430 estudiantes; pero el sector privado registra un crecimiento anual de 9 mil 7 estudiantes y el sector público de 3 mil 423 estudiantes.

Deuda social del Estado mexicano

El Estado mexicano, con gobiernos emanados de diversos partidos, ha incurrido en una prolongada deuda social medida por su obligación constitucional de garantizar la educación y el desarrollo científico del país. Con todo, el dato empírico evidencia los bajos niveles de inversión en los rubros de educación, educación superior y en ciencia y tecnología.

Conforme a la Ley General de Educación (art. 25), el Estado debe invertir un mínimo de 8% del producto interno bruto (PIB) en educación, del cual 1% será para investigación científica y el desarrollo tecnológico, actividad realizada por las IES públicas. México figura como el país que menos invierte en educación superior, además de

los 38 países miembros de la OCDE ocupó el lugar 36 en 2019 por su bajo nivel de inversión en educación primaria y secundaria.¹⁸

Durante más de una década, la inversión del gobierno federal en C+T se ha ubicado por debajo del umbral de 1% del PIB, el parámetro constitucional en este rubro ha mostrado una trayectoria inconsistente y a la baja. La inversión en C+T (2007 y 2020) ha oscilado entre 0.2 y 0.3% del PIB, mientras que entre 2007 y 2018 se observó una trayectoria ascendente; con el arribo del gobierno de la denominada cuarta transformación comenzó una trayectoria declinante hacia 0.2% del PIB. El gasto destinado a la producción académica y científica, como parte del gasto público total, también se ha deteriorado, puesto que entre 2007 y 2015 se percibió una trayectoria ascendente por encima de 1% hasta alcanzar 1.5%, desde 2016 y hasta 2019, en 2020 se desplomó a 0.8% del presupuesto del gobierno federal.¹⁹

México invierte 0.4% del PIB, es decir, 9 mil 458.5 millones de dólares.²⁰ Está muy lejos de Japón, el primer lugar de porcentaje de PIB invertido, gasta 3.4%, que serían 169 mil 554.1 millones de dólares. Estados Unidos invierte sólo 2.7%, pero son 476 mil 459 millones de dólares en paridad de poder adquisitivo (PPA).

La inversión en I+D es crucial para el desarrollo nacional, en México se ubica en niveles de un subdesarrollo equiparable al de África y muy lejos de los países que hacen grandes apuestas al desarrollo científico, esto es, dedica únicamente 0.5% del PIB al rubro de I+D.²¹ Comparativamente, esa paupérrima proporción es idéntica a la de países africanos como Tanzania, Uganda, Senegal y Botswana; es notorio que muy lejos de los niveles de países con mayor desarrollo relativo que canalizan más de 3%

¹⁶ Instituto Nacional De Estadística y Geografía (INEGI), «Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo», INEGI, 2017, en <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/>

¹⁷ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), *Educación superior en México. Resultados y relevancia para el mercado nacional*, París, OCDE, 2019.

¹⁸ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), «Mexico», in *Education at a Glance 2022: OCDE Indicators*, París, OCDE, 2022, en <https://doi.org/10.1787/de781390-es>

¹⁹ Ignacio Ruelas, «Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué?», *Nexos*, 2019, en <https://educacion.nexos.com.mx/gasto-publico-en-ciencia-y-tecnologia-en-mexico-por-que-como-y-para-que/>

²⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), «¿Cuánto invierte su país en I+D?», 2019, en <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/#!lang=es>

²¹ *Idem*.

de su PIB a este importante rubro —Israel, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Destaca Finlandia, que dedica 3.2 de cada 100 dólares del PIB a I+D, cuando México sólo invierte 50 centavos de cada 100 dólares a ese rubro estratégico. Los países con mayor gasto en el aludido rubro fueron Estados Unidos (454 mil millones de dólares PPP), China (337 mil millones), Japón (160 mil millones), Alemania (101 mil millones) y la República de Corea (69 mil millones).

Cuadro 1. Gasto en I+D por sector en México (millones de dólares)

<i>Sector</i>	<i>Millones de dólares</i>	<i>%</i>
Universidad	4 617.50	48.8
Estado	3 058.30	32.3
Capital	1 688.10	17.8
Privado no lucrativo	94.57	1.0
<i>Total</i>	9 458.47	100.0

Fuente: UNESCO (2019).

Concerniente a México, en la convergencia tripartita de los sectores estatal, capitalista y universitario, desconcierta que el gasto en I+D lo encabezan las universidades (aportan 4 mil 617.5 millones de dólares PPA); le sigue el gobierno (3 mil 058.3 millones); posteriormente el sector privado empresarial (mil 688.1 millones); por último, el sector privado sin fines de lucro (94 mil 576.5). Así, sólo 17.8% proviene del capital privado, mientras que el sector gubernamental aporta 32.3% y las universidades contribuyen con 48.8%, la parte restante deriva del sector privado sin fines de lucro.

Se supone que la I+D tiene como principal beneficiario al capital privado, quien habrá de apropiarse de las innovaciones tecnológicas para aplicarlas en mejoras sustanciales en la productividad. Gran parte de sus frutos se materializan en patentes, bajo un esquema de privatización de los frutos de la ciencia, que de suyo tienen como fuente mayoritaria los recursos públicos provenientes de fuentes gubernamentales y universitarias; sin embargo, la participación del país en ese rubro

también es deficiente. México se ubicó en los últimos lugares entre los miembros de la OCDE por su bajo nivel de inversión, escaso personal científico y un número limitado de patentes registradas.²² Es evidente que el número de patentes no es un indicador directo de mejoras en la productividad social del trabajo, muchas de ellas se quedan en reserva o no tienen aplicaciones en la producción, o bien aunque se tengan no son lo suficientemente significativas para mejorar la productividad e imponerse en la carrera competitiva intercapitalista.

¿Dónde están las prioridades?

En un contexto donde falta incentivar la educación terciaria, así como mayor inversión del Estado mexicano, conviene identificar los intereses estatales y la canalización preferente de los recursos públicos. En el gobierno actual se privilegia de manera denodada e insospechada —para un gobierno que se dice de izquierda y transformador— a las fuerzas armadas como pilar de poder económico y político, en una suerte de cogobierno civil-militar incontestable. En contraste, el sistema educativo nacional está resquebrajado, al igual que el sanitario, sin que exista mayor preocupación por rehabilitarlo. En ese flanco debilitado se encuentran las universidades públicas que experimentan una fase crítica.

En los cinco años de presupuestación, las fuerzas armadas han sido beneficiadas con más de 100 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 97%; mientras que las universidades han sido castigadas con un decrecimiento de 3%. Las fuerzas armadas controlan más recursos que el conjunto del sistema educativo superior y posgrado en México: 221 mil millones de pesos contra 162 mil millones.

El gobierno actual, con sus aliados, impulsa un régimen militarizado y un sistema universitario muy desigual, con instituciones en crisis, sobre todo las Universidades Públicas Estatales (UPEA). La retórica oficial presenta a las milicias como «pueblo uniformado» y a las universidades como centros neoliberales, corruptos y privilegiados. Tal decisión, además de peligrosa —puesto que refuerza los aparatos coercitivos y debilita a los científicos y educativos—, no presagia ninguna ruta de desarrollo nacional, sino un régimen autoritario y socialmente regresivo.

En sí, las prioridades son políticas, la configuración de una hegemonía político-militar transexenal, sin cambios estructurales que suponen cambios sociales y adecuaciones en la red de instituciones de educación, salud y bienestar social, más allá de los programas asistencialistas.

²² Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), *Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación 2016, América Latina*, París, OCDE, 2018.

Déficit de científicos

Cuando el enfoque gubernamental privilegia la militarización, sobresale la falta de formación de más científicos en todas las áreas del conocimiento, además la de promover proyectos interdisciplinarios en torno a temas estratégicos dirigidos al desarrollo nacional. El desarrollo reclama la formación de trabajo complejo, aquel que se forma con años de estudio y en perfiles educativos que correspondan a los requerimientos de mercados laborales de ramas productivas estratégicas, dinámicas y rentables. Ello supone la formación de científicos en las universidades.

En la división del trabajo científico, tradicionalmente se distinguen áreas de especialización y funciones de la ciencia. Dos grandes bloques del trabajo científico se distribuyen entre, por una parte, la investigación básica orientada a la generación de conocimiento original, por ejemplo, dedicada a hacer investigación básica en áreas primordiales (petróleo, física, nanotecnología, robótica, genómica y otras formas alternas de energía, así como bioquímica); por otra parte, la investigación aplicada volcada al conocimiento generado en otros países y formas de utilizarla en México. No sólo se desarrolla ciencia en cuestiones técnicas o desde las ciencias empíricas naturales, sino también en ciencias sociales, además de las humanidades. Más todavía, la interdisciplinariedad, que no es una área del conocimiento sino una especie de transición epistemológica, supone la integración de equipos de trabajo para investigar desde distintos ángulos problemas complejos irreductibles a dominios disciplinarios cerrados o descontextualizados.

Los científicos de diversas áreas del conocimiento configuran una masa crítica para el desarrollo por ser generadores de conocimiento científico que eventualmente puede ser aplicado en la solución de problemas sociales y económicos. Empero, esa masa es notablemente insuficiente, aparte de desorganizada y a menudo ajena o desconectada de los grandes problemas del desarrollo. El desarrollo nacional reclama una capacidad de formar científicos y conocimiento científico aplicado a los grandes problemas nacionales, pero si no se apoya a las universidades en esa formación ni se impulsan proyectos de investigación estratégicos, se obra en contra del desarrollo.

Si bien México figura como la 16ª economía mundial, en buena medida por su papel como plataforma exportadora de bienes manufacturados a cargo de multinacionales, es un país con un enorme rezago de trabajo complejo, en concreto de personal científico en áreas estratégicas. La proporción de investigadores por población es de 315 por millón de habitantes, una de las más bajas en América Latina, donde sobresalen Argentina (mil 211), Brasil (887), Uruguay (696).²³ Frente a los países desarrollados existe un abismo científico

impresionante. Por ejemplo, Corea del Sur, que ahora es una potencia científica, pero en los ochenta se parecía a México, cuenta con 7 mil 900 investigadores por millón de habitantes y registra 14 veces más patentes que México (218 mil 975 *versus* 15 mil 941). De modo que en este último persiste un profundo déficit de científicos: el país ocupa el octavo lugar en la OCDE por número de investigadores por cada mil integrantes, en tanto que sólo tiene 241 investigadores nacionales (miembros del Sistema Nacional de Investigadores, SNI) por cada millón de habitantes. Cuando menos debería de haber alrededor de 70 mil científicos, pero sólo se registra a 36 mil 714 miembros del SNI, aunque es una cuantía que se ha duplicado (antes eran 14 mil 559), aun así sigue siendo notoriamente insuficiente, y máxime en un contexto de recorte presupuestal en ese y otros programas afines.

Sólo para aproximarse a los niveles latinoamericanos de Brasil y Uruguay, se necesitan al menos 40 mil nuevos investigadores en el SNI del Conacyt. El aumento presupuestal es de 26%, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEEF) 2022, el mayor incremento en 10 años, eventualmente puede fomentar el trabajo de investigadores, pero todavía es insuficiente.

Por si fuera poco, casi la mitad de esos investigadores se concentra en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en desdoro de la mayoría del extenso territorio nacional. Ello sin considerar que no todos los miembros de ese sistema desarrollan investigación científica en sus diferentes ramas, en la medida en que la acumulación compulsiva de puntos no necesariamente significa generación de conocimiento científico. En realidad, el SNI es un programa de incentivo salarial por mérito que no desarrolla capacidades científicas críticas para el desarrollo.

Perfiles universitarios, educativos y profesionales

Falta diversificar el desarrollo científico y las universidades en todo el país, más allá del modelo de concentración actual. Con miras a formar nuevos científicos, un punto clave es imprimir un fuerte

²³ UNESCO, *op. cit.*

impulso a la educación superior en el nivel de posgrado, lo cual supone también fomentar los niveles precedentes y propiciar alianzas interinstitucionales. Aunque la matrícula de educación superior se ha duplicado en los últimos 10 años (5 millones de estudiantes), el posgrado sigue teniendo una baja participación: en la maestría ocho de cada 100 estudiantes universitarios y en el doctorado sólo uno de cada 100.

La prevalencia de modelos educativos tradicionales, es decir, profesionalizantes y monodisciplinarios, propicia que incluso la formación de los escasos investigadores se apegue a los patrones educativos convencionales, y que no se consideren mayormente procesos formativos interdisciplinarios en las áreas tecnológicas, sociales y humanísticas. Las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se han convertido en bandera para imprimirle un giro tecnocrático a la educación superior, en específico de posgrados. En México, sólo 12% de los estudiantes de posgrado están en áreas de tecnología, ingenierías o matemáticas.²⁴ Ese indicador se toma como deficiente para la formación de capacidades científicas y de innovación tecnológica. Más significativo es el dato de que alrededor de 50% de la matrícula universitaria en México se concentra sólo en 12 carreras, principalmente de corte «tradicional».

En el nivel nacional es apremiante una reforma educativa de amplio espectro, que incluya la formación de científicos y el crecimiento del posgrado en las universidades. Mínimamente debería estimularse la duplicación de estudiantes y futuros científicos, en las más diversas áreas del conocimiento, de preferencia en aquellas que promuevan el trabajo interdisciplinario y el estudio de los grandes problemas del desarrollo. De lo contrario, continuará el proyecto de neoliberalización (austeridad) con aderezos populistas sin rumbo ni concreción.

No deja de ser controversial que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Conacyt, al amparo de una epistemología pluralista, la interculturalidad y la decolonialidad, proyecten incluir los saberes

ancestrales en contra de la epistemología occidental en el sistema educativo al amparo de la idea de que hay muchas epistemologías y formas de conocimiento que valen igual que el conocimiento científico propiamente dicho. En un marco donde se antepone la discursividad ideológica sobre el trabajo científico, al respecto se menciona que existe una ciencia neoliberal a la cual se opone una ciencia del Estado.

Desarrollo desigual de las universidades públicas autónomas en México

Las grandes universidades nacionales asentadas en las megaciudades (UNAM, IPN, UAM) disponen de un cierto presupuesto amplio, capacidad de interlocución e infraestructura suficiente. La Ciudad de México, epicentro de la vida política y cultural del país, concentra las tres universidades públicas con mayor presupuesto en el país: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Juntas consumen 39% del presupuesto destinado a las universidades públicas del país. Las universidades de la Ciudad de México representan aproximadamente 58% de los investigadores del SNI en el país.

Las universidades medias son instituciones públicas estatales en zonas metropolitanas, con boyante actividad industrial, financiera y comercial, que captan una gran población estudiantil y disponen de amplio subsidio federal (UdG, UANL, UAS, UABP). En contraste, las universidades pequeñas ubicadas en entidades de menor desarrollo relativo, con fuertes problemas de pobreza, violencia y migración, disponen de un perfil universitario más constreñido: bajo presupuesto, incidencia local, carreras tradicionales, requerimientos de infraestructura, salarios y prestaciones. No obstante, en estas demarcaciones, el influjo social, cultural y político de dichas universidades es relativamente mayor en su propio entorno, a menudo su funcionamiento está comprometido por carencias presupuestales.

En un país tan centralista como el mexicano, no sorprende la concentración en las grandes universidades de presupuesto, científicos y producción académica. La excesiva concentración de las capacidades de investigación y las capacidades empresariales en unas cuantas universidades de México tiene una clara repercusión negativa en el desarrollo de las regiones menos avanzadas económicamente, y en el desarrollo de todo el país. De lo cual se desprende la necesidad de no golpear ni precarizar a las grandes universidades sino, por el contrario, de elevar el nivel de las medianas y pequeñas para consolidar un sistema universitario público autónomo más equitativo que responda a las múltiples necesidades y potencialidades del desarrollo regional y nacional.

²⁴ *Idem.*

Crisis de las universidades públicas autónomas estatales

Los diagnósticos oficiales de las autoridades educativas, plegadas a la norma neoliberal (austeridad), recalca en el trabajo académico al cual motejan por estar colmado de privilegios: salarios (salarios, prestaciones y pensiones) y corrupción. Las prestaciones superiores a las de la ley, una legislación a la baja que precariza el trabajo, se consideran partidas onerosas e impagables, independientemente de que sean conquistas laborales o políticas de valorización del trabajo académico, deben sujetarse, bajo la observancia de la norma hacendaria cicatera, a cambios estructurales, es decir, a la consabida política del ajuste social que erosiona los contratos colectivos y precariza las distintas formas de trabajo.

Sin hacer una autocrítica, que el Estado en modo alguno acostumbra, en cuanto a su incumplimiento constitucional al derecho a la educación y a la necesidad de impulsar la ciencia, la tecnología y la cultura, se achaca al salario diferido de los académicos, esto es, a las pensiones, el problema principal de las recurrentes crisis financieras de las universidades: «Sale más cara la universidad pensionada que la universidad en activo» (Concheiro *dixit*). No se admiten prestaciones superiores a las de la ley, donde la ley es la norma del ajuste social neoliberal.

La postura oficial del gobierno actual atribuye a gestiones del pasado las insuficiencias presupuestales del presente:

Tienen que ver los logros y los cambios estructurales que están dispuestos, yo he sido muy sincero: en tanto mantengamos condiciones tan altas por encima de la ley son impagables, se hace inviable, nadie hizo los números en aquellos tiempos de lo que nos iba a costar, nos cuesta más la universidad jubilada que la universidad en activo, por ahí va.²⁵

La edad de oro de la universidad pública es aquella cuando el Estado financiaba con suficiencia a la educación pública, en particular a la educación superior, un escenario que no sólo permitió la expansión del sistema universitario y el despliegue de sus funciones sustantivas, sino que además se logró el desarrollo pleno de todas sus capacidades científicas, educativas y culturales. Tal desarrollo quedó trunco y fue clausurado con el proyecto neoliberal, cuyo principio es la puesta en práctica del ajuste social, y con ello el recorte de la inversión educativa, la imposición de la austeridad y el impulso a que las universidades generen recursos propios, que les permita com-

plementar el insuficiente subsidio público, hecho que redundará en una espiral de mercantilización y privatización encubierta de la universidad pública.

La cicatería gubernamental se asoma cuando se destinan menos recursos a la educación, un pilar inobjetable de cualquier estrategia del desarrollo, y más al sector militar, a la sazón las fuerzas represivas del Estado, o los megaproyectos de infraestructura de alcance local (aeropuerto, tren turístico, refinería). Frente al gasto improductivo y el derroche en obras sin fundamento técnico y social, destaca el déficit educativo. Según la SEP, para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior a escala nacional se requieren 30 mil millones de pesos, con lo que se podrían suprimir el cobro de cuotas, que en promedio representan 30% de los ingresos de las universidades, y atender la demanda estudiantil.

Causas de la crisis de las universidades públicas estatales

Con relación a los alumnos de educación superior en México, 26% están en las universidades públicas estatales, mientras que las universidades públicas federales sólo tienen 7%. Las universidades tecnológicas poseen 35% de la matrícula. Con todo, prevalece un patrón de desarrollo desigual en el sistema universitario nacional que tiende a la concentración de recursos en universidades «nacionales» y la distribución de una bolsa presupuestal entre el resto de las universidades estatales y otras instituciones de educación superior. En un contexto donde se impone una reducción del presupuesto público (federal y estatal) bajo la norma implacable de la austeridad/ajuste/recorte. El subsidio de las universidades públicas proviene de tres fuentes principales: federal, estatal y recursos propios. El más importante es el federal, pero el gasto federal ha venido decreciendo en términos reales y los gobiernos locales retienen o no cubren su cuota, que debe de ser de 50%; al tiempo que se multiplican las presiones para que las universidades generen recursos propios, esto se traduce en cobro de cuotas y servicios a los estudiantes, además de la venta de servicios en docencia, investigación y vinculación.

²⁵ Comunicación Social de la UAS, «Se verá una posible salida para atender la difícil situación económica de la UAS: Concheiro Bórquez», Dirección General de Comunicación Social, 13 de octubre de 2020, en <https://dcs.uas.edu.mx/noticias/2906/se-ve-una-posible-salida-para-atender-la-dificil-situacion-economica-de-la-uas-concheiro-borquez>

El aumento de trabajadores académicos, y, en consecuencia, de la masa salarial sin soporte presupuestal, precariza a las universidades. Como respuesta, las autoridades educativas y hacendarias, en conjunción con los directivos universitarios, acometen los contratos colectivos y el sistema de pensiones, a los cuales se les atribuye la carga de responsabilidad de la crisis recurrente de las universidades.

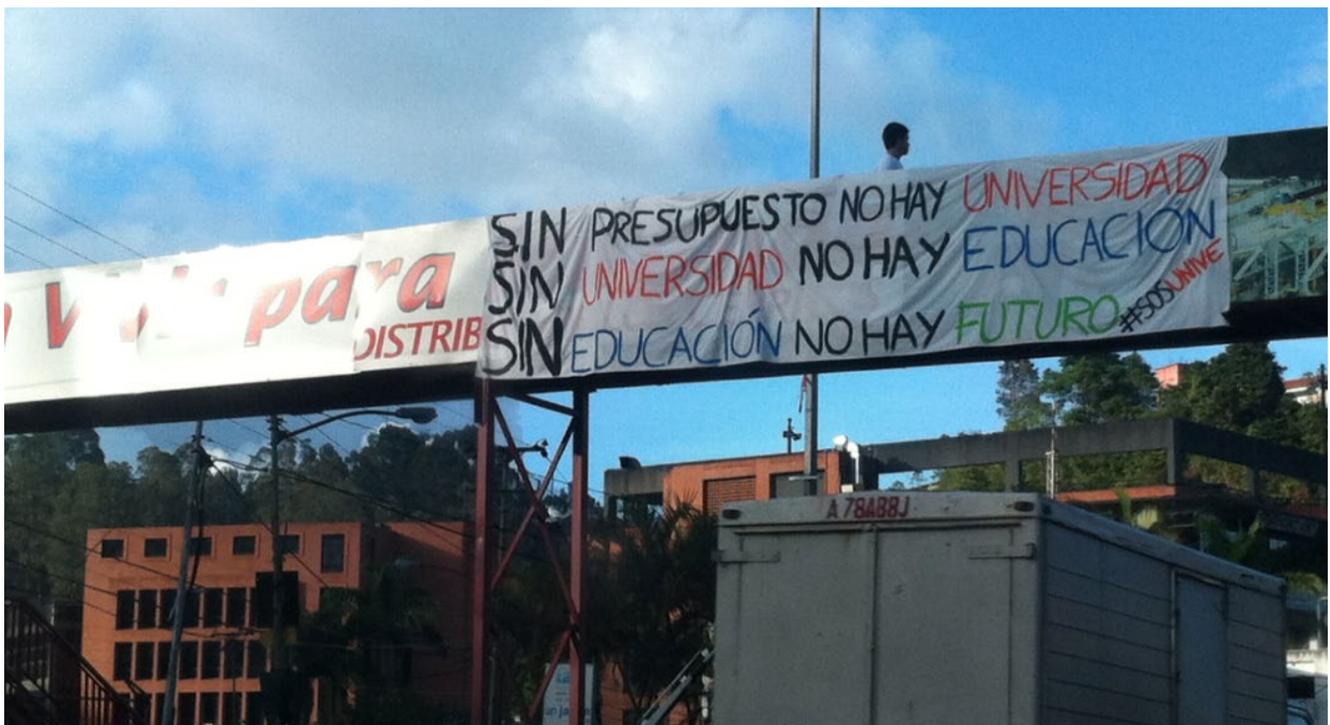
La insuficiencia de recursos presupuestales deriva en el hecho de que, de las 34 universidades públicas estatales en México, suelen estar en crisis recurrente 11 de ellas, cuando experimentan un síndrome de quiebra financiera al cierre de cada ciclo fiscal (la mayoría tiene problemas financieros, pero no todas en estado crítico): Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California.

Un rasgo en común es que la mayoría de las universidades en predicamento están ubicadas en ciudades medias con bajo nivel de desarrollo, donde son más acusados los problemas de pobreza, violencia y rezago educativo. Además, algunas tienen como antecedente su carácter socializante, es decir, su vínculo con sectores populares. De persistir e imponerse la norma de la austeridad neoliberal se aniquilará, en definitiva, el proyecto universitario genuinamente popular. En este punto, conviene diferenciarlo del proyecto universitario populista, como sucede con las denominadas Universidades del Bienestar Benito Juárez, que no son universidades (no realizan investigación ni extensión y la docencia es de capacitación

para el trabajo, una especie de técnico superior universitario).

Ante la exigencia de acrecentar la matrícula para subir los niveles de cobertura de educación superior en el país, muchas universidades han recurrido al incremento de la contratación de personal docente sin contar con soporte presupuestal. Esto es un arma de doble filo, por una parte, las autoridades educativas y hacendarias al no reconocer esas nuevas plazas no están dispuestas a incrementar los presupuestos correspondientes; por otra parte, el aumento de personal docente se hace mediante la precarización, con la partición de las que deberían de ser plazas estables en una multiplicidad de contrataciones precarias de docentes a tiempo determinado u hora clase, contratados por honorarios.

En definitiva, el aumento de trabajadores académicos, y, en consecuencia, de la masa salarial (salarios y prestaciones) sin soporte presupuestal, precariza a las universidades. En respuesta, las autoridades educativas y hacendarias, en conjunción con los directivos universitarios, acometen los contratos colectivos y el sistema de pensiones, a los cuales se les atribuye la carga de responsabilidad de la crisis recurrente de las universidades, aparte



de entronizar un discurso sobre corrupción y privilegios en las universidades, pero sin hacer una evaluación crítica de la deuda social del Estado mexicano acumulada en materia de educación pública, no sólo en la esfera de educación superior sino en todos los niveles.

Disparidades salariales

En términos generales, de acuerdo con los anuarios estadísticos (ANUIES), existen 400 mil docentes en la educación superior pública y privada en México, de los cuales 80 mil tienen contratos de tiempo completo o equivalente y 320 mil son «por hora o de asignatura», es decir, 80% cuenta con salarios y condiciones de trabajo precarios e inseguros, aunado a que cubren largas jornadas laborales frente a grupo.

Lo anterior genera efectos perversos, como el hecho de que 20% de trabajadores con condiciones estables o seguras, demora su jubilación y obstruye el remplazo generacional, lo que en lugar de propiciar solidaridad intergeneracional, deriva en lo contrario, desprecio, falta de solidaridad y resentimiento. Peor aún, se estimulan contrataciones precarias e inseguras, que propician competencia y diferenciación, además de que por la vía de los hechos se diluye la contratación colectiva con cláusulas formales, y se abre un amplio espectro de informalidad, semiproletarización y competencia. De igual modo, se alienta el productivismo y la carencia de seguridad social, así como el control corporativo de trabajadores para asegurar la recontractación.

La disparidad salarial dentro de una institución como la UNAM, el prototipo universitario mexicano, se manifiesta en el hecho de que profesores titulares de tiempo completo pueden ganar entre 60 mil y 140 mil al mes, más el salario del SNI, mientras que los profesores de asignatura pueden ganar 8 mil o 10 mil al mes, y en ellos recae la carga del trabajo docente. Ese patrón de diferenciación se replica y amplifica en las demás universidades públicas. En términos más gruesos se verifica una diferenciación salarial entre las grandes universidades y el resto, sobre todo las universidades pequeñas o medianas estatales. Por si fuera poco, la diferenciación entre instituciones públicas y privadas no es menos escandaloso, existen también enormes distancias al seno de las universidades privadas, en concreto entre las grandes y los establecimientos con endeble bases de financiamiento que descansan en la precarización de los trabajadores académicos.

El tobogán de la precarización arroja a docentes con años de servicio dando clases por asignatura, por honorarios asimilables a salario, sin seguridad social, participando en concursos para contratación, sin lograrlo por favoritismos o competencia extrema. Además de profesores con una cantidad significativa de clases y de alumnos, quienes reciben exiguos salarios por hora de clase, y se ven obligados

a complementar con más horas de trabajo extra sin paga para hacer lecturas, revisar ensayos, preparar y calificar exámenes, hacer labores administrativas, entre otros.

El trabajo del profesor de tiempo completo (PTC) no representa un privilegio improductivo, como podría desprenderse de los discursos neoliberales y populistas, asimismo es una labor extenuante que se desdobra en funciones de docencia, investigación, asesoría, escritura, conferencias, evaluaciones, trámites, gestiones, reuniones, etcétera. En el colmo, la actividad académica orientada a la ciencia riñe con el tiempo exigido a los académicos para que funjan como administradores de sí mismos, con el riesgo de que los productos de la actividad científica se tornen irrelevantes.

El éxito de la gestión diferenciada del trabajo académico resulta de incitar la división entre trabajadores que despliegan actividades intelectuales y científicas, con potencialidad de vincularse a los problemas sociales. Con fundamento en el discurso de denostación de los académicos como trabajadores privilegiados, se lanza un velo para cubrir las apariencias, y en lugar de pugnar por la revalorización del trabajo académico en general y la mejora de las instituciones educativas, se atiza la hoguera para acentuar las diferenciaciones, la desvalorización y los conflictos internos dentro de las instituciones académicas.

Adicionalmente, se da el fenómeno revelador de los trabajadores académicos que tienen pocas horas de trabajo asignada y se ven obligados a proletarizarse, es decir, a trabajar en diversas instituciones educativas simultáneamente o en otras actividades ajenas a la educación para complementar su ingreso, eso que coloquialmente llaman el «profesor taxi» o mejor dicho la desprofesionalización paulatina de la docencia en todos los niveles, en específico en el superior, donde el sistema educativo se quiebra en su eslabón más débil.

Por añadidura, hay una disparidad entre los ingresos de los funcionarios y directivos frente a los académicos. Esa brecha puede ser tan amplia que los funcionarios llegan a percibir hasta 25.5 veces más que los docentes de menores ingresos en las instituciones públicas de educación superior

en México.²⁶ Coloquialmente se nombra al funcionario que percibe grandes remuneraciones como la «burocracia dorada», que centellea en un mar de precariedad laboral.

Mercados laborales

Existe un marcado contraste entre los perfiles de egreso y las posibilidades de insertarse al ámbito laboral. Los mercados laborales tienden a ser estrechos y segmentados, con empleos flexibles y precarizados; muestran una tendencia acusada hacia la desvalorización de carreras y profesiones y, por ende, de títulos y cédulas universitarias. De entrada, además de las trabas para insertarse al ámbito laboral, sus capacidades adquiridas están minusvaloradas. Por si fuera poco, las profesiones liberales que predominan entre los egresados sufren una proletarización acelerada, ello se verifica en el hecho de que los profesionistas trabajan en actividades ajenas a su formación.

Una tendencia acusada ha sido la proletarización de los profesionistas, por ejemplo, los médicos son contratados por consultorios de farmacia u hospitales en condiciones precarias, los abogados que litigan son pocos, los músicos obtienen ingresos por presentación, etcétera. Muchos profesionistas sobreviven trabajando en actividades ajenas a su formación y se ocupan en las más variadas actividades laborales. Con la pérdida de prestigio

que las profesiones liberales conferían a los individuos que ostentaban los títulos de médico, abogado, ingeniero o contador, se transmite una pérdida de prestigio de la institución que los respalda, y, paulatinamente, se desvanece el halo romántico decimonónico del *alma mater*.

Al calor de la llamada cuarta revolución industrial se avizora el surgimiento de nuevas profesiones y la desvalorización de muchas han estado vigentes en consonancia con las modalidades productivas anteriores. Se advierte una tendencia más pronunciada a la automatización por el uso de tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial, y consecuentemente la generación de un desempleo estructural que afectará a sectores de egresados universitarios. El cambio tecnológico, supone la destrucción de puestos de trabajo y creación de nuevos, y las universidades deben reconvertir su oferta educativa a riesgo de perder relevancia social.

La hipótesis del Foro Económico Mundial es la reducción futura de un catálogo de más de 3 mil profesiones a unas 300, las cuales estarán sujetas a validaciones recurrentes y tendrán que ser multidisciplinarias, no especializadas. La visión tecnocrática de la educación hace énfasis en las profesiones, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). El Foro Económico Mundial anticipa cambios para 2022 en toda la industria y el ascenso de profesiones concomitantes como especialistas en *big data*, inteligencia artificial, ingenieros en robótica, bioingenieros o especialistas en gente y cultura, que de representar 16% de la actual base laboral pasarían a 27%. Mientras que los empleos «redundantes», la «oferta tradicional», compuesta por analistas financieros, contadores o *telemarketers*, pasarán de 31 a 21%, bajo el supuesto de que serán suplidos por algoritmos.²⁷ 

²⁶ Arturo Sánchez, «En universidades, gran brecha salarial», *La Jornada*, 22 de julio de 2018, en <https://www.jornada.com.mx/2018/07/22/politica/005n2pol>

²⁷ Foro Económico Mundial, *The Future of Jobs Report 2018*.